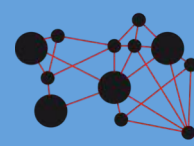


SRA/2019

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA
ARS 2019 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT



CENTER FOR
**GLOBAL
AFFAIRS**
& STRATEGIC STUDIES

INFORME
Abril 2019



Universidad
de Navarra

© 2019

Center for Global Affairs & Strategic Studies

Universidad de Navarra

Facultad de Derecho–Relaciones Internacionales

Campus Pamplona: 31009 Pamplona

Campus Madrid: Marquesado Sta. Marta 3, 28027 Madrid

<https://www.unav.edu/web/global-affairs>

SRA/2019




SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA

ARS 2019 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT

INFORME
Abril 2019

Un radar en la región de seguridad de Estados Unidos

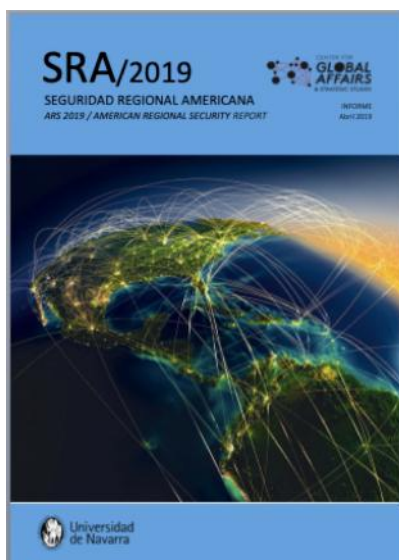
 El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que pone en marcha el Center for Global Affairs & Strategic Studies de la Universidad de Navarra tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico.

Con frecuencia, las naciones americanas echan en cara a Estados Unidos que no atiende a las necesidades del resto del continente más que cuando percibe directamente amenazada su seguridad. Pero los mismos Estados latinoamericanos miran a menudo para otro lado cuando sus vecinos se enfrentan a serios problemas, y solo contravienen lo que es una peculiar idiosincrasia de la región –no inmiscuirse en cuestiones de la soberanía ajena para que nadie cuestione la propia–, cuando su misma seguridad se ve en riesgo. El ejemplo más reciente es el de Venezuela. Después de largo tiempo de gobierno autoritario y crisis humanitaria en esa nación, Estados Unidos ha reaccionado al sentirse de alguna manera amenazado por la presencia rusa en el Caribe, mientras que los países de su entorno lo han hecho por el derrame migratorio que está suponiendo el colapso venezolano.

La seguridad es, pues, la piedra de toque de los asuntos hemisféricos, constituyendo su aspecto verdaderamente más regional. De ahí nuestro deseo de abordar prioritariamente este campo. El informe SRA pretende recoger los hechos más significativos de los últimos meses en ámbitos que van desde el narcotráfico y el terrorismo a las migraciones y la presencia en el continente de potencias extrahemisféricas, como Rusia y China. Es un barrido, a modo de radar, de lo más relevante ocurrido en el último año en cuestiones de seguridad en una región a la que ha vuelto la geopolítica.

Emili J Blasco

Center for Global Affairs & Strategic Studies



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

La geopolítica vuelve al Hemisferio Occidental 5

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

Rusia aumenta su atención estratégica en el Gran Caribe por la crisis venezolana 8

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

China avanza en Centroamérica 12

EXGUERRILLAS

La disidencia de las FARC se consolida en su actividad delictiva 15

PIRATERÍA

Crece la alarma por la piratería en las aguas entre Venezuela y las Guayanas 18

NARCOTERRORISMO

Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera 21

TERRORISMO ISLAMISTA

EEUU sigue el regreso de yihadistas de ISIS al *semillero* de Trinidad y Tobago 24

MIGRACIONES

EEUU y Panamá despliegan una fuerza operativa para filtrar el paso de Darién 28

DRUG TRAFFICKING

Efforts in Washington and Mexico are apparently deflating the opioid epidemic 31



Donald Trump y Vladimir Putin, en julio de 2018 [Shealah Craighead]

RESUMEN EJECUTIVO

La geopolítica vuelve al Hemisferio Occidental

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el *near abroad* de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el *near abroad* chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese *extranjero próximo* de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio

económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocación la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía

Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominicana. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la

Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes. Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer. ●



Rusia aumenta su atención estratégica en el Gran Caribe por la crisis venezolana

Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

° *Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)*

° *El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos*

° *El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría*

IRENE ISABEL MASPONS

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la [presión que está recibiendo en su propio near abroad](#), como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La [Casa Blanca alertó de la posibilidad](#) de que Moscú quisiera interferir

especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la [diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante](#) han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por [la revista Time reveló que empresarios rusos](#) habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para [evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia](#) por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160

aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de [contratistas militares privados llegados de Rusia](#), pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía [un centenar de militares](#), con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así

PRESENCIA DE RUSIA EN EL CARIBE

Acciones rusas y/o alertadas por Washington en 2018/2019



© Global Affairs & Strategic Studies

también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante [Kurt W. Tidd](#), ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante [Craig S. Faller](#), quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una [entrevista concedida entonces a](#)

[la Voz de América](#), Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de [doscientos militares rusos rotan su presencia](#) en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una [estación satelital instalada por Rusia en Managua](#), a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en

2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un [contrato para emplazar en Cuba](#) una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio

Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos [acuerdos para la colaboración](#) en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la [entrega de importantes cantidades de petróleo](#) a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente. ●



China avanza en Centroamérica

El encaje de Panamá en la Ruta de la Seda y la ruptura con Taiwán de nuevos países del área sitúan los intereses chinos a las puertas de EEUU

- ° *Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en Argentina*
- ° *Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital*
- ° *La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 2005; se han firmado 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018*

JIMENA VILLACORTA

La República Popular de China estrechó en 2018 su relación con América Latina, especialmente con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín desarrolló otras actuaciones en la región y sobre todo mejoró su posición estratégica en América Central, para preocupación de Estados Unidos.

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron su reconocimiento diplomático de Taiwán para pasar a establecer plenas relaciones con China. En mayo lo hizo la República Dominicana, país integrado en algunos de los acuerdos centroamericanos, y en agosto lo hizo El Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en Centroamérica (de los 18 países que siguen reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están en el istmo americano: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres microestados), China cuenta ya con suficiente espacio para sus operaciones logísticas.

Panamá se ha convertido en un interesante objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 Panamá recibió la designación de nación más favorecida por parte de China, y en diciembre [Xi Jinping realizó la primera visita](#) de un presidente

chino al país. En el marco de esa visita, Pekín anunció que existen 20 compañías chinas realizando operaciones en territorio panameño, como la construcción de [terminales marítimas a ambos lados del canal interoceánico](#), del cual China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de todo el tráfico), después de Estados Unidos. Además existen otras 70 empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, de la que China es el principal proveedor. Panamá es pieza fundamental para el propósito sugerido por las autoridades chinas de extender a Latinoamérica el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, para lo cual ambos países firmaron un memorándum, el primero con esa finalidad en la región.

Alerta de EEUU

La influencia de Pekín en Panamá ha generado suspicacias en Washington. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, ya indicó en su comparecencia ante el Senado la preocupación por el posicionamiento chino en el entorno del Canal. En septiembre EEUU llamó a consultas a la encargada de negocios de su embajada panameña para analizar esa actividad, y en octubre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su inquietud en una visita al país. En febrero de 2019, el almirante Craig

CRÉDITOS DE CHINA A LATINOAMÉRICA

| AMOUNT | TYPE | LENDER | YEAR |
|--------------------|------|--------------|---------|
| YEAR | | NO. OF LOANS | AMOUNT |
| 2018 | | 5 | \$7.7B |
| Country | | Amount | |
| Venezuela | | \$5B | |
| Argentina | | \$1.1B | |
| Ecuador | | \$969M | |
| Dominican Republic | | \$600M | |
| 2017 | | 7 | \$6.2B |
| 2016 | | 8 | \$10.3B |
| 2015 | | 14 | \$21.5B |
| 2014 | | 7 | \$13B |
| 2013 | | 10 | \$14B |
| 2012 | | 7 | \$7B |
| 2011 | | 6 | \$7.9B |
| 2010 | | 11 | \$35.6B |
| 2009 | | 8 | \$12.7B |
| 2008 | | 1 | \$356M |
| 2007 | | 4 | \$4.8B |
| 2005 | | 1 | \$30M |

Tomado de Inter-American Dialogue & Boston University

Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante el Senado en lo “particularmente preocupante” que constituye “el esfuerzo de China para ejercer control sobre infraestructuras clave asociadas con el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre la construcción por parte de China de puertos en el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el almirante, “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Precisamente uno de los puertos que China podría tomar control fue [objeto de debate político en El Salvador](#), donde el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para designar zona económica especial el entorno del

puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La embajadora de EEUU en El Salvador acogió la iniciativa advirtiéndole que el interés mostrado por China hacia La Unión, reconocido por las autoridades salvadoreñas, podría derivar en el uso de las instalaciones como base militar china.

El aumento de la actividad de China en Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como se ve, con un incremento paralelo de las alertas desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el relativo a la [estación de seguimiento y observación espacial](#) construida y gestionada por China en la Patagonia argentina, a la que en febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el marco de su visita al Capitolio. El temor es que, al ser dirigida por una empresa dependiente del Ejército chino, la estación pueda tener uso militar, aunque el Gobierno argentino ha requerido el compromiso de Pekín de que eso no ocurra.

Créditos y Venezuela

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a la región un total de 7.700 millones de dólares en créditos, lo que supuso un ligero incremento respecto a 2017, tras dos años de descensos, aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con mayor volumen, de acuerdo con la [base de datos financiera China-Latinoamérica](#) de Diálogo Interamericano. Desde 2005, la inversión directa china ha sido de 141.000 millones de dólares, la mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo de China (CDB) y casi la mitad destinados a Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 correspondieron a Venezuela, que así obtenía una asistencia que desde que comenzó 2007 solo le faltó en 2008 y 2017.

Si inicialmente la inversión estuvo más destinada a la industria extractiva, con el tiempo China ha ido entrando también en el sector de las infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 150 [proyectos de infraestructura de transportes](#), de los cuales en 2018 casi la mitad se habían iniciado.

La vinculación financiera especial con Caracas, básicamente a cambio de petróleo a futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar

el reconocimiento de la designación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, China negó en marzo de 2019 el visado al representante nombrado por Guaidó en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que por primera vez iba a celebrar en territorio chino su reunión anual. Esto fue visto como la [primera intervención de China en la política regional americana](#), valiéndose del creciente peso de sus créditos e inversiones en diversos países.

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de diversas maneras. En 2018 se conocieron [detalles de la ayuda tecnológica prestada](#) por el gigante

chino de telecomunicaciones ZTE para desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por el Gobierno venezolano, en una implementación que busca el control social.

También hubo apoyo al régimen chavista con el envío de [un buque hospital a Venezuela](#), en septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una semana en aguas venezolanas, un mes después de que el Pentágono anunciara que estaba programando el envío del Comfort, un buque con diversos quirófanos y otras instalaciones médicas, a Colombia para allí atender a los venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria del vecino país. ●

La disidencia de las FARC se consolida en su actividad delictiva

El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

- Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez
- El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca
- La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

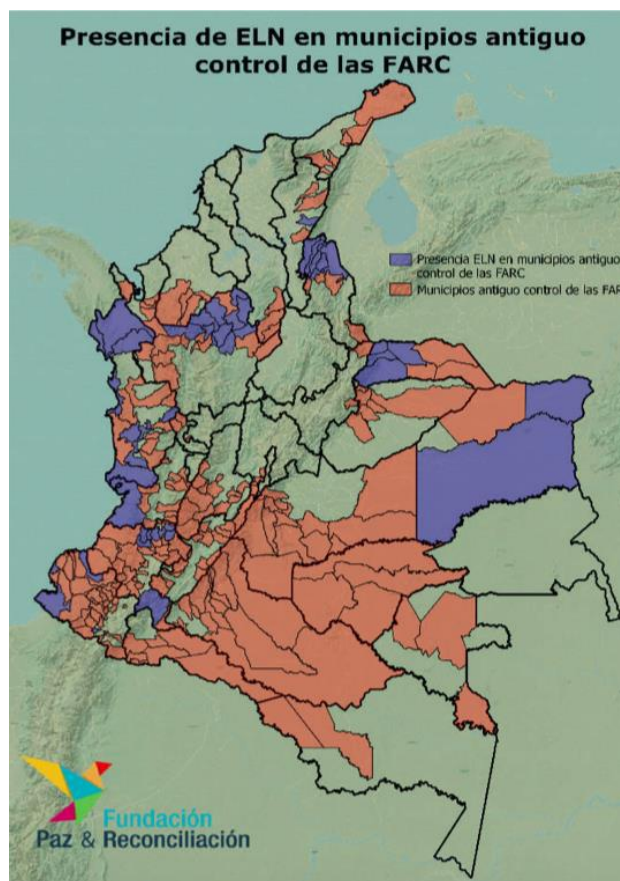
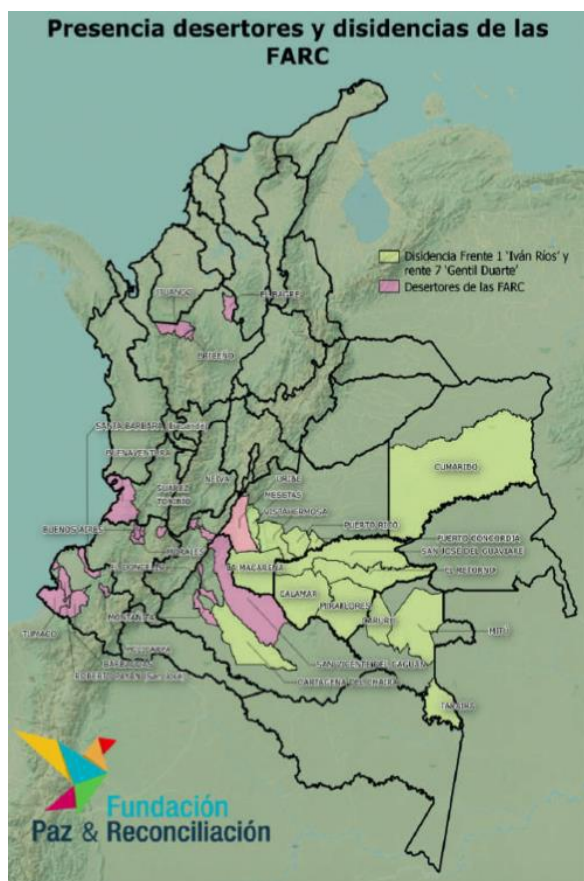
MARÍA GABRIELA FAJARDO

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la [Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe](#) estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la [Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra](#) a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un [informe dado a conocer en octubre](#), del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto [documento del Departamento de Defensa](#) remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.



Mapa 1: amarillo, frente de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz; rosa, desertores que no se sumaron al acuerdo.
 Mapa 2: azul, presencia del ELN en municipios que controlaban las FARC; rojo, municipios de antiguo control de las FARC

Reorganización

Tras pasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 [acerca de esa coordinación](#), dirigida

especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han [confirmado esa cooperación](#). En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, [como El Paisa y Romaña](#).

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las

FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la [presencia en Colombia de carteles mexicanos](#), que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado [por el fiscal general de la nación](#).

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. [Estados Unidos hace esos cálculos al alza](#) para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último [informe de la Oficina contra la Droga](#) y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de

producción podría estar llevando a [una erradicación forzosa](#), no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. [Según la Defensoría del Pueblo](#), desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el [informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas](#) para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido de violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano. ●

Crece la alarma por la piratería en las aguas entre Venezuela y las Guayanas

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

° En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

° El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

° Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

MANUEL LAMELA

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren a bordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el [incidente de piratería con mayor número de muertos](#) de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por

desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarlos al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, [un grupo de treinta hombres fue detenido](#) por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un [informe publicado por la ONG One Earth Future](#), dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de



© Global Affairs & Strategic Studies

Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espionosa es la [situación del Golfo de Paria](#), ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la

llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la [creación de una unidad de élite aérea](#) en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que [seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados](#) y llevados a Venezuela por sus raptos, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona [pueden dividirse en dos tipos](#). Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra

mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales

factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos... Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir. ●

Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera

La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

° En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

° La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

° Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

LISA CUBÍAS

Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera – espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos [testimonios de funcionarios de la era Obama](#) han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las

fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El [“Proyecto Casandra”](#), [ampliamente expuesto](#) por la publicación *Politico* a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la [creación de una unidad de investigación específica](#) denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más adelante, en octubre, designó a Hezbolá [como organización criminal transnacional](#), al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión

de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela [existen “células activas”](#) de ese grupo.

Acción en la Triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuele Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el



© Global Affairs & Strategic Studies

mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido,

pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado

por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, juzgados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico. ●



EEUU sigue el regreso de yihadistas del ISIS al ‘semillero’ de Trinidad y Tobago

El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

° Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

° El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

° El Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

IGNACIO YÁRNOZ

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo [sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista](#). El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretudo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como [Jamaat Al Muslimeen](#), que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país

como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue [sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos](#) por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalada en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el [anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano](#). Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el censo oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanas y caribeñas.

Según una [investigación de Simon Cottee](#), profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran

hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal ([Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES](#)), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en



© Global Affairs & Strategic Studies

septiembre de 2018 el [Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones](#) a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la [custodia de algunos menores de edad](#).

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa’ad at-Trinidadí. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros

ALGUNOS COMBATIENTES TRINITENSES DETENIDOS, FALLECIDOS EN COMBATE O EN EL PUNTO DE MIRA

-Zaid Abed al-Hamid, 35 años, quien el 6 de abril de 2014 (de acuerdo a Simon Cottee) viajó Siria con su mujer y sus tres hijos.

-Nicoalas Lee, 39 años, original de Point Fortin. Conocido en el Estado Islámico como "Abu Yousef Al-Amriki".

-Gailon Su-Lay, 43 años, antigua Miss Longdenville. Fue detenida junto con su hijo de 16 años Su-Lay Su en Siria.

-Emraan Ali y Eddie Aleong, ambos ciudadanos trinitenses fueron sancionados por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo sospecha de financiar al Estado Islámico bajo la orden ejecutiva 13224.

-Shane Crawford y Fareed Mustapha, ambos probablemente fallecidos en combate. La última intervención de Shane Crawford en los medios de comunicación de la banda terrorista animaba a cometer atentados terroristas dentro de sus fronteras (reflejo de la última estrategia del Estado Islámico).

-Abebe Oboi Ferreira, presumiblemente fallecido en combate. Viajó a Siria junto con sus dos hijos Mahmud and Ayyub. Cuando la situación se complicó, dejó a sus dos hijos a cargo de su "mujer ISIS" (una ciudadana belga), quien los abandonó en la carretera. Fueron rescatados y llevados al campamento de Roj.

-Entre los familiares de Imam Nazim Mohamed (imán de la mezquita Boos anteriormente mencionada en este artículo) se encuentran su hija Anisa (53 años), sus tres nietas Sabirah Waheed Kumar (29 años), Azizah Mohammed (32 años) y Aiydah Firdaws Waheed-Hasib (23 años). Todas ellas fueron sentenciadas a 20 años de prisión en abril de 2018. Además, se cree que el suegro de Imam Nazim Mohammed, Daud Mohammed (56 años) fue ejecutado por las fuerzas iraquíes por pertenencia a la banda terrorista.

-Algernon Fareed Mustapha, se confirma que "falleció en batalla en la segunda semana de Julio 2015". Otro ciudadano confirmado como fallecido en batalla es Sean Bartholomew, de Baja Santa Cruz. Este último viajó a Siria vía Suriname.

-Osayaba Abayomi Abdullah Muhammed, de Belmont, fue registrado al haber viajado a Siria vía Londres y reportes sin confirmar afirman que ha fallecido en batalla.

-Shawn Parsons, de D'abadie, fue registrado como fallecido en combate. Se sospecha que viajó a Siria vía Londres, Dubai y Manila.

-Tariq Abdul Haqq, de Arouca, fue registrado al haber viajado a Siria vía Barbados y reportado como fallecido.

Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico *The Guardian* y de periódicos de Trinidad y Tobago

soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos:

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como [declaró al New York Times](#) el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, "a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son

muy respetados y hablan inglés".

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa'ad at-Trinidadí –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al "Califato". Como

indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico *The Guardian* el [investigador de la Universidad de West Indies](#) Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa’ad at-Trinidadí (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa’ad at-Trinidadí menciona como su mentor, [Shaykh Ashmead Choate](#). Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa’ad at-Trinidadí en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadí”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían

tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de [Yasin Abu Bakr](#), antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico.

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con [Jesse Morton](#), un ciudadano estadounidense que trabajaba con [Zachary Chesser](#) para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de [Germaine Lindsay](#), uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a [Mohammed Mizanur Rahman](#) y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como [Umar Farouk Abdulmutallab](#) y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago. ●

EEUU y Panamá despliegan una fuerza operativa para filtrar el paso de Darién

Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

° De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

° El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

° La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

ALEX PUIGREFAGUT

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias

centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El [Servicio Nacional de Migración de Panamá](#) registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el [Servicio Nacional de Fronteras panameño](#) detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el [Departamento de Seguridad Interior de EEUU](#), que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una [Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración](#)

(JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 [el Comando Sur de Estados Unidos](#) utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la [supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales](#) considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada

Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon [dos puntos de vigilancia compartidos](#) entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la [pasividad mostrada por Colombia](#), que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

El paso ilegal por Darién de personas que

TRÁNSITO IRREGULAR DE EXTRANJEROS EN 2018. Frontera oriental de Panamá (Darién)

| REGIÓN | TOTAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Total | 8.445 | 219 | 530 | 569 | 832 | 880 | 1.004 | 1.001 | 899 | 827 | 888 | 796 |
| Asia | 5.400 | 159 | 325 | 428 | 667 | 760 | 621 | 770 | 505 | 431 | 425 | 409 |
| África | 2.287 | 50 | 194 | 127 | 141 | 116 | 229 | 233 | 312 | 306 | 350 | 229 |
| Antillas | 611 | | 6 | 7 | 8 | | 128 | 90 | 56 | 75 | 100 | 141 |
| Sudamérica | 131 | 9 | 4 | 6 | 16 | 4 | 26 | 7 | 25 | 9 | 9 | 16 |
| Centroamérica | 10 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Norteamérica | 13 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Eurasia | 2 | | | | | | | | | 2 | | |
| Europa | 1 | | | | | | | | | 1 | | |

Fuente: Servicio Nacional de Migración de Panamá

Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La [amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién](#) se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

Caravanas centroamericanas

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense [Center for a Secure and Free Society](#) (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de los convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración

centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, [el presidente estadounidense exageró el estado de alarma](#) por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un [comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior](#) de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México. ●

Efforts in Washington and Mexico are apparently deflating the opioid epidemic

After a record production of opium poppies in Mexico and overdose deaths in the US the problem has stopped growing

° *Less amount of heroin is reaching the US market: Mexican authorities eradicated 29,207 hectares of poppy crops in 2017, and 17,288 hectares in the first half of 2018*

° *US President Trump signed in October 2018 the Opioid Crisis Response Act; a National Drug Control Strategy was published in January 2019*

° *Mexico is the main transit route into the US for fentanyl originating from China; Mexican anti-narcotics operations try to exert more control over this trade*

MARCELINA KROPIWNICKA

The severe opioid crisis experienced by the United States in recent years, with a record number of deaths by drug overdoses in 2017, apparently began to remit in 2018, according to the first available data. Both the efforts of the United States to confront the epidemic and of Mexico in eradicating opium poppy crops seem to be bearing fruit.

The dramatic increase in opium cultivation and heroin production in Mexico in the last years triggered drug consumption in the US. Besides, Mexico is the main route into the US for fentanyl, an opioid narcotic which is behind the US opioid epidemic as well.

After four years of sharp increase, [the number of deaths in the United States](#) due to opioid overdose rose in 2017 to 47,600, twice as many as in 2010. The main part of those deaths was due to the consumption of prescription opioids (17,029), followed by overdose deaths involving heroin (15,482). In both cases, the increase was mainly due to the use of synthetic narcotics, basically fentanyl, as prescription drug or mixed with heroin.

The first data referring to 2018 provided by the US health authorities [seem to reflect a stabilization](#) in the number of deaths due to opioid overdoses, which would at least indicate

that the problem has stopped growing. Along with the efforts of the US administration to put in place a stricter regulation for the prescription of certain medicines, especially affecting synthetic opiates, there is a greater eradication of illicit crops in Mexico, with special emphasis on the cultivation of opioid poppies.

In 2017 the Mexican authorities proceeded to eradicate 29,207 hectares of this crop, thus limiting the heroin that in 2018 could reach the US domestic market. In 2018 eradication accelerated: in the first half of the year, the crop of 17,288 hectares was eliminated. This is a progress highlighted by the latest [International Narcotics Control Strategy Report](#) (INCSR), published in March 2019 by the US Department of State.

Heroin production

Illicit heroin and fentanyl have been infecting US neighborhoods for years. Initially, the source for almost all heroin found in the US was from Southern Asia. Over the past few decades, however, the trade for heroin has changed drastically. Most of the heroin found in US communities comes from South America, and namely Mexico. This has been fueled by a number of factors, including increased production and trafficking by criminal

organizations. These current tendencies in drug trafficking lead to opioid abuse, and represent a considerable shift in outcomes. This has obliged the governments in both countries to instill and coordinate new law enforcement responses.

The United States is home to the largest heroin market in the Americas. Created from the milky sap scraped from the seedpod of an opium poppy, heroin can be transformed into multiple forms. These include powder, viscous tar, pills, a rock-like black substance and more. In addition to this, the substance has different degrees of purity, with white powder heroin being the purest and black tar-like heroin being the most impure. Heroin can also be administered through a number of means, but most commonly is smoked, injected or snorted.

According to the [United Nations Office on Drugs and Crime](#) (UNODC), most of the heroin trafficked into the US comes from Mexico. Along with this, Mexican poppy cultivation and heroin production have been on the rise, especially over the past decade, contributing to the ever-increasing threat to the United States. In fact, 2017 was the year Mexican poppy cultivation and heroin production reached a record high, as the [Office of National Drug Control Policy](#) of the White House reaffirmed in August 2018: poppy cultivation in Mexico rose 38 percent, from 32,000 hectares in 2016 to 44,100 hectares in 2017; it went from 685 tons to 944 tons of potential opium production, and from 81 tons to 111 tons of potential pure heroin elaboration, almost five times 2012 levels.

Evaluations carried out by the US Drug Enforcement Agency (DEA) in its October 2018 report [National Drug Threat Assessment](#) (NDTA) stated that Mexico accounts for 91 percent (by weight) of heroin found in the US. A similar figure is given by the [World Drug Report](#) (WDR) published by the UNODC in June 2018:

“Analysis of heroin samples in the United States over the past decade shows the increasing predominance of Mexico (90 percent of samples analysed in 2015) as a source country of the drug.” According to the INCSR, the Department of State report already mentioned, Mexico is especially focused on producing heroin, marijuana, and methamphetamine that is destined for the US; it is also a main transit route—originating from China—for other important trigger of the opioid crisis in the US: fentanyl.

Fentanyl

Fentanyl’s availability is widespread and surging. While there are licit forms of the opioid, such as painkillers and anaesthetics, illicit production and trafficking of it are on the rise. The new trend is rooted toward mixing synthetic opiate fentanyl in Mexico’s tarry black heroin, without the consumer’s knowledge. Fentanyl is a synthetic opioid that is approximately 50 times more potent than heroin and 100 times stronger than morphine. The opioid is much cheaper when it comes to production, mainly because rather than being grown on a farm it is manufactured in a laboratory. The decreased cost for the traffickers and increased high for users signifies that drug producers have begun to cut their heroin with fentanyl.

The DEA warns that Mexican cartels present an intense threat to US neighborhoods mainly given their dominance in heroin and fentanyl exports). It also noted that a majority of the samples that were seized and analyzed involved fentanyl in its powder form. The concern arising from this is that fentanyl could be pressed into counterfeit pills, mainly because most drug heroin. This means that the creation of such counterfeit pills could ultimately affect a larger population of individuals.

| Mexico Poppy/Heroin | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hectares under cultivation | 12,000 | 10,500 | 11,000 | 17,000 | 28,000 | 32,000 | 44,100 |
| Tons of potencial opium production | 250 | 220 | 225 | 360 | 600 | 685 | 944 |
| Tons of potencial pure heroin | 30 | 26 | 26 | 42 | 70 | 81 | 111 |

Source US Department of State

The increase in heroin related deaths has been primarily linked to heroin being combined with fentanyl. The counterfeit pills could increase deaths due to fentanyl and white powder heroin looking alike. Consequently, users are unaware that the heroin they have purchased contains fentanyl, thus removing the user's ability to know the potency of the drug and preventing them from correctly dosing in respect to their tolerance level.

Solving the problem

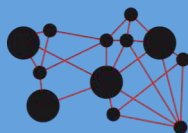
The opioid epidemic suffered by the US in the last years was confronted in 2018 by the Trump administration with some special measures. In October 2018 President Trump signed the Opioid Crisis Response Act, which gave more powers to the US health authorities to monitor the situation and extended the controls on patient access to some specific drugs. In January 2019 a [National Drug Control Strategy](#) was published by the White House in order to take extra steps to

protecting the public through effective drug abuse prevention, addiction treatment and use of law enforcement actions.

Apart from these new tools, the US relies on a long-standing relationship with Mexico regarding anti-narcotic matters. Both countries set up in 2008 the Merida Initiative, which allows the US to assist the Mexican authorities in different fields. It includes several measures in order to improve law enforcement operations: training and equipment to dismantle covert drug labs, cutting-edge airport security training, advanced inspection tools equipped along border crossings and checkpoints, and so forth in order to improve law enforcement operations, among others. Results have already been seen, as Mexican units trained by US officials have seized more than 300 illicit laboratories since 2015. In addition to this, canines donated by the initiative have helped detect a significant amount of illicit drugs attempting to pass the border. ●



Universidad
de Navarra



CENTER FOR
**GLOBAL
AFFAIRS**
& STRATEGIC STUDIES